

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LITIGIO ESTRATÉGICO EN GUATEMALA Y HONDURAS 2019-2020



Foto: Cabildo municipal en Tocoa, Honduras vota no a la minería en su territorio, noviembre de 2019.
Crédito: Víctor Ferrigno.

trōcaire

Encargo por Trócaire y realizado por los investigadores Víctor Ferrigno y Alma Baldizón

Versión original completa en español y anexos disponibles bajo solicitud

Resumen elaborado por Leigh Brady, asesora de Gobernabilidad y Derechos Humanos de Trócaire.

I CONTENIDO

Presentación	2
¿Qué es el litigio estratégico?	4
Disputas legales sobre el control y uso de los recursos naturales	5
Hallazgos de la investigación	6
El litigio estratégico es un proceso que puede perdurar más allá de un fallo judicial	6
El empoderamiento político de las y los sujetos de derechos afectados en el centro de los casos	7
El empoderamiento y la participación de las mujeres	7
Apoyo psicosocial	9
Conclusiones	10
Recomendaciones	12

I PRESENTACIÓN

Trócaire ha estado apoyando a las organizaciones de la sociedad civil en su trabajo para proteger y defender los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala y Honduras durante más de una década. Una de las estrategias de este trabajo es la utilización del litigio estratégico. Ha demostrado ser una herramienta valiosa, tanto en la lucha social para promover la vigencia de los derechos humanos, como para su restitución o reparación en los casos en que hayan sido gravemente vulnerados, restringidos o ignorados.



A fines de 2019, Trócaire decidió encargar un estudio comparativo de algunos casos de litigio estratégico en Guatemala y Honduras con el fin de explorar **las experiencias de las mujeres y hombres indígenas y campesinos quienes han jugado un papel central en estos casos, aplicando una perspectiva de género**, y rescatando las lecciones aprendidas y buenas prácticas en torno a este trabajo. Trócaire contrató a un equipo de investigación formado por dos personas, un experto en derechos humanos y litigio estratégico en Guatemala y una psicóloga social, también de Guatemala.

En cuanto al campo de investigación, se seleccionaron dos casos de cada país y se dio prioridad a los casos vinculados a la defensa de los recursos naturales por parte de comunidades indígenas y campesinas. También se eligió un caso de justicia transicional relacionado con la esclavitud sexual durante el conflicto armado interno en Guatemala, debido a su carácter paradigmático. La investigación cualitativa de los cuatro casos seleccionados se sustentó y se complementó con marcos conceptuales integrales sobre los derechos humanos, el fortalecimiento del sujeto político y un enfoque de litigio estratégico (qué es lo que abarca, para qué sirve y cómo llevarlo a cabo).

El equipo de investigación utilizó una metodología mixta: los apartados teóricos sobre el litigio estratégico, el fortalecimiento del sujeto político y el marco legislativo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas se basaron en una extensa revisión bibliográfica y algunos trabajos previos por parte del investigador jurídico. El apartado empírico se basa en una revisión de los expedientes legales relacionados con los casos seleccionados, así como entrevistas individuales y colectivas de un total de 90 informantes. Las entrevistas y las discusiones en grupos focales se llevaron a cabo en 8 lugares diferentes en ambos países entre noviembre de 2019 y enero de 2020.

Un meta clave de la investigación fue determinar si los enfoques adoptados habían contribuido al **empoderamiento de las mujeres y hombres indígenas y campesinos que están al centro de estos casos**. La definición operativa de empoderamiento que se aplica es: “un proceso mediante el cual un/a sujeto/a de derechos aumenta su capacidad para ejercer una mayor cantidad de poder soberano...,” con especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres y hombres indígenas y campesinos a los que se hace referencia son principalmente

Las entrevistas y las discusiones en grupos focales se llevaron a cabo en 8 lugares diferentes en ambos países entre noviembre de 2019 y enero de 2020.

sujetos/as de derechos afectados, quienes también fueron legalmente representados como querellantes o acusados/as en los casos. En este sentido **son tanto víctimas/sobrevivientes de violaciones y abusos de los derechos humanos como defensores/as de derechos humanos**. Sin embargo, también se incluyeron en el análisis de la investigación otros miembros de las comunidades afectadas, como los familiares cercanos de los querellantes y acusados y compañeras/os defensoras/es de primera línea.

Para responder a la pregunta de investigación, el equipo preguntó a las partes interesadas clave, incluida la mayoría de las y los mismos sujetos de derechos afectados, así como sus abogadas/os, sus familiares, otras y otros defensores/as de primera línea en las comunidades afectadas y las/os aliadas/os de la sociedad civil sobre sus percepciones de estos procesos. Los aspectos del litigio estratégico que se quiso analizar fueron: los procesos de toma de decisiones; el intercambio de información; la relación entre las y los sujetos de derechos afectados y sus abogadas/os; la coalición de actores que lideran los casos y las alianzas políticas adicionales; el nivel de educación política y acción cívica de las y los sujetos de derechos afectados; y si ellas y ellos habían recibido apoyo psicosocial o de otra naturaleza antes, durante o después de los casos.

Este resumen destaca los principales hallazgos y recomendaciones relacionadas bajo cuatro temas:

- El Litigio estratégico como un proceso multifacético con múltiples objetivos que puedan perdurar más allá de un fallo legal
- El empoderamiento político de las y los sujetos de derechos afectados en el centro de los casos
- Empoderamiento y participación de las mujeres
- Acompañamiento psicosocial

La investigación está principalmente dirigida hacia nuestras organizaciones socias y los equipos de país de Trócaire en Centroamérica y otras regiones, quienes puedan estar interesados en utilizar un enfoque de litigio estratégico con el fin de no solo lograr reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones y abusos de derechos humanos, sino también para lograr la transformación de las causas subyacentes de esas violaciones. En particular, se espera que los marcos conceptuales, los hallazgos



Altar Maya delante las puertas del Corte Suprema de Guatemala.
Crédito: Elena Hermosa/Trócaire.

y las recomendaciones de la investigación puedan servir como recursos para las personas encargadas de desarrollar y emprender procesos de litigio estratégico multifacéticos para defender y proteger los derechos sobre los recursos naturales en Guatemala y Honduras.



En el río Guapinol. Gabriela y Briana son hijas de dos de los defensores de agua que están presos desde el 28 de agosto de 2019.
Crédito: Giulia Vuillermoz

¿QUÉ ES LITIGIO ESTRATÉGICO?

La *American Bar Association* se refiere al litigio estratégico como un caso legal emprendido “como parte de una estrategia para lograr un cambio sistémico más amplio. El caso puede generar cambios, ya sea a través del éxito de la acción en sí y su impacto en la ley, estableciendo un precedente o una política, o al exponer públicamente la injusticia, crear conciencia y generar un cambio más amplio.” El litigio estratégico es, a menudo, diversas estrategias entrelazadas entre sí, que se utiliza como parte de una campaña de incidencia más amplia o como parte de una lucha a largo plazo por los derechos humanos. También se conoce como litigio estratégico de derechos humanos.

Como se explica en *Herramientas de Incidencia Política en Espacios Restringidos para las Organizaciones de la Sociedad Civil de Lifeline/Freedom House* (2020):

En contextos sometidos a restricciones, es posible que los procedimientos judiciales carezcan de imparcialidad y transparencia. Sin embargo, incluso si una organización de la sociedad civil (OSC) no gana el caso del litigio, se pueden obtener beneficios del esfuerzo.

Entre otros, transformar el debate público, promover el empoderamiento individual o comunitario o presionar a las agencias o ministerios para que modifiquen su comportamiento. O mejor aún, cuando se gana el caso, este puede sentar un precedente para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Los casos que resultan exitosos pueden dar lugar a una decisión judicial que provoque cambios directos o indirectos en políticas, leyes, procesos judiciales e instituciones.

El litigio estratégico también puede elevarse a organizaciones regionales si a nivel nacional no se consigue justicia para las personas sobrevivientes de los abusos de derechos humanos. Las organizaciones regionales o internacionales también pueden respaldar

normas o precedentes para las iniciativas de incidencia política. La Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han servido de ayuda en este tipo de litigios estratégicos en el pasado.

La definición operativa del litigio estratégico utilizada por el equipo de investigación fue: “el conjunto de estrategias y litigios jurídicos y judiciales orientados a utilizar el Derecho como un factor de transformación social. Este uso transformador del Derecho tiene como propósito final la defensa del interés colectivo, la promoción de los derechos humanos y la justicia social.” De otro modo, el litigio estratégico es el uso de la ley y estrategias complementarias para lograr un resultado que va más allá del beneficio de la(s) persona(s) representadas (como demandante o demandado). Es el uso del sistema jurídico, en relación con el reconocimiento, la vigencia, el respeto, la defensa y/o la promoción de uno o varios derechos fundamentales a partir de un caso previamente identificado. Actualmente Trócaire apoya procesos de litigio estratégicos en Honduras, Guatemala, Myanmar, Palestina/Israel y Zimbabwe.



El líder indígena Fausto Sánchez y el Consejo Mam Txe Txe dan una rueda de prensa tras la liberación de Sánchez, después de haber sido encarcelado durante 2 años y 3 meses por oponerse a una presa hidroeléctrica en el territorio de sus comunidades en Guatemala. Crédito: Nilton Rivera, Prensa Comunitaria. Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

LAS DISPUTAS LEGALES SOBRE EL CONTROL Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES



Como ya se mencionó, se priorizaron los casos vinculados a la defensa de los derechos territoriales y sobre los recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas para el campo de investigación.

Además, se eligió un caso de justicia transicional relacionado con la violencia y la esclavitud sexuales durante el conflicto armado interno en Guatemala por su carácter paradigmático. Cabe destacar que este caso, conocido como el caso **Sepur Zarco**,¹ también ocurrió **en el contexto de conflicto sobre los derechos territoriales y de los recursos naturales indígenas entre las comunidades indígenas mayas Q'eqchi' y el Estado de Guatemala**. El segundo caso en Guatemala se centra en una disputa entre las Autoridades Ancestrales indígenas Mam de la municipalidad de San Pablo, San Marcos y una empresa de represas hidroeléctricas llamada Hidrosalá.² Este caso ha abarcado los esfuerzos tanto para detener legalmente la represa hidroeléctrica como para obtener la liberación de varios líderes indígenas que fueron criminalizados por su oposición a la represa. En Honduras, los casos seleccionados fueron el caso de José Isabel Morales (Chabelo)³, integrante del Movimiento Campesino del Aguán, quien fue acusado de un asesinato que no cometió y estuvo encarcelado durante casi siete años. La acusación contra él se dio en el marco de una disputa territorial entre campesinos y terratenientes del territorio. El segundo caso es el de las y los Defensores del Río Guapinol y San Pedro,⁴ donde ocho integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa han sido criminalizados por defender el manantial de agua de sus comunidades frente a una empresa de explotación minera. Al momento de publicar este documento han pasado 17 meses en prisión preventiva por cargos falsos.

Cabe señalar que los cuatro casos difieren entre sí, y representan diferentes coaliciones de sujetos/as de derechos afectados y sus aliados, se rigen por marcos legales de dos países distintos, y se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. El caso de Chabelo se cerró tras su liberación en 2016, aunque la disputa por la tierra en el Valle del Bajo Aguan aún no se ha resuelto y una petición de reparaciones para Chabelo se ha presentado ante el Corte Inter-Americana de Derechos Humanos. El caso de **Sepur Zarco** obtuvo en 2016 un fallo judicial histórico que sentó un precedente nacional e internacional: por primera vez se juzgó la violencia y la esclavitud sexuales **como crimen de lesa humanidad en un tribunal nacional**. Los victimarios fueron condenados, recibieron sentencias de 120 y 240 años, respectivamente, y las víctimas recibieron una reparación digna. Estas reparaciones simbólicas y materiales aún se encuentran en proceso de implementación. El caso de las Autoridades Ancestrales Mam vs. Hidrosalá sigue en curso, aunque los líderes indígenas falsamente encarcelados, incluido Fausto Sánchez, han sido liberados. El caso de los Defensores del Río Guapinol y San Pedro sigue en curso, debido a que los 8 defensores aún permanecen en prisión preventiva por cargos falsos y la empresa minera continúa operando y contaminando los ríos Guapinol y San Pedro, a pesar de varias acciones legales y políticas de parte del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y sus aliados para frenarla. Una de esas acciones fue un cabildo abierto realizado en Tocoa en noviembre de 2019 a la que asistieron varios centenares de personas de la comunidad y durante la cual la gran mayoría rechazó la minería en su territorio, exigió el cierre de la empresa minera e instó al Gobierno Municipal a no renovar los permisos municipales para la explotación minera, que expiraron el 31 de diciembre de 2019. El Concejo Municipal aprobó las resoluciones del cabildo pero la minera sostiene que no son vinculantes y las ha ignorado.

¹ Ver [video](#) de Trócaire sobre el caso y [reportaje](#) de Impunity Watch de las lecciones aprendidas del caso

² Ver [estudio de caso](#) sobre la disputa legal entre de las autoridades ancestrales Mam vs. Hidrosalá

³ Ver [resumen](#) del caso de Chabelo

⁴ Ver resumen de las y los defensores del Río Guapinol en una carta de [eurodiputadas/os](#) a las autoridades hondureñas de abril 2020

I HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN



Un mural que celebra la lucha de los pueblos indígenas por sus recursos naturales, Honduras. Crédito: Garry Walsh

El litigio estratégico es un proceso que puede perdurar más allá de un fallo legal

La investigación demuestra que en el litigio estratégico no solamente se trata de utilizar tribunales y órganos judiciales para intentar lograr justicia, rendición de cuentas y proteger y promover los derechos humanos, sino significa utilizar **una gama amplia de estrategias legales y complementarias** incluidas: la movilización comunitaria, la incidencia, las comunicaciones, el apoyo psicosocial y la seguridad. Los casos de litigio estratégico pueden llevar muchos años en construir, preparar, dar seguimiento y cerrar, y por lo tanto deben entenderse como **procesos multifacéticos que requieren de muchos recursos y un compromiso a largo plazo** de una variedad de partes interesadas. La investigación afirma que esto es particularmente cierto en Guatemala y Honduras, ya que sus sistemas judiciales son evidentemente corruptos, ineficientes, parciales, racistas, patriarcales, sexistas y conservadores. Además, las mujeres y los hombres de estos países que defienden los derechos a los recursos naturales de sus comunidades y otros derechos humanos a través de un litigio estratégico lo hacen en condiciones de alto riesgo, “[...] en un espacio cívico agredido, en un contexto de graves violaciones y restricciones a los derechos civiles y políticos. [...] Los defensores son atacados con total impunidad, criminalizados, deslegitimados y desacreditados por su labor de promoción y defensa de los derechos humanos.”⁵

Además, si bien el logro de un fallo o fallos legales favorables podría ser el objetivo final de un caso de litigio estratégico, en muchos casos no significa el final del proceso. Es decir, un fallo legal favorable puede lograr justicia y rendición de cuentas en el papel, pero el fallo debe implementarse para que la justicia y la rendición de cuentas se logren de manera tangible. Por ejemplo, en el caso Sepur Zarco, en 2016 la jueza otorgó reparaciones a toda la comunidad que fue afectada por las violaciones de derechos humanos que sufrieron las mujeres querellantes. Sin embargo, cuatro años después, las reparaciones aún no se han implementado en su totalidad, y se requiere un monitoreo y una vigilancia ciudadana permanente para garantizar que el Estado rinda cuentas y así cumplir con su deber de implementar estas reparaciones. Además, en los tres casos que involucran la criminalización de las y los defensores de los derechos a los recursos naturales, su liberación de la prisión es el objetivo inmediato, pero no el objetivo final de estos casos. El objetivo final es promover el reconocimiento, la protección y el cumplimiento de los derechos colectivos a los recursos naturales de sus comunidades. Otros objetivos dentro de estos casos de litigio estratégico son esclarecer la verdad y sus reputaciones, cambiar la narrativa dominada por el Estado de que estos defensores son “terroristas que están en contra del desarrollo” y desafiar la impunidad de las élites corporativas y estatales corruptas que se

⁵. Informe de país sobre Honduras del Relator Especial de la ONU sobre la situación de defensores de Derechos humanos.

confabulan para utilizar estrategias de litigio maliciosas dirigidas a difamar y disuadir a quienes amenazan sus intereses económicos y políticos.

El empoderamiento político de las y los sujetos de derechos que están al centro de estos casos

Un hallazgo clave de la investigación fue que los querellantes en el caso Sepur Zarco adquirieron un poder político en virtud de su participación en el caso, como se describe en la siguiente sección. Por el contrario, los acusados de los otros tres casos ya habían adquirido un cierto nivel de empoderamiento político antes de su detención, debido a que ya habían estado activos en la vida cívica y política de sus comunidades en la defensa de sus derechos a los recursos naturales. De hecho, los colectivos ciudadanos de base a los que pertenecen ya han tenido una participación directa o indirecta en actividades políticas y electorales. Las y los líderes y comunitarios de San Pablo incluso habían participado y ganado las elecciones municipales, en alianza con la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala. Esto demuestra que los líderes comunitarios entienden que sus luchas y su caso de litigio estratégico forman parte de una lucha por poder más amplio contra los aparatos estatales que no cumplen con su función de garantizar la paz, el desarrollo ni los derechos humanos.⁶

Su nivel de empoderamiento y la fortaleza de los colectivos ciudadanos a los que pertenecen, junto con el enfoque solidario de las OSC con las que eligieron aliarse en los casos, aseguró que fueron/han sido participantes activos en los casos de litigio estratégico. Por ejemplo, se encontró que en términos generales se identificó una relación aceptable o buena entre las y los sujetos de derechos afectados y sus comunidades con las/os abogadas/os incluso con los abogados privados que fueron contratados por las OSC acompañantes.

Todas las decisiones importantes relacionadas con la estrategia y el procedimiento legales se han tomado de forma democrática y, en general, durante asambleas o reuniones comunitarias.

Todas las decisiones importantes relacionadas con la estrategia y el procedimiento legales se han tomado de forma democrática y, en general, durante asambleas o reuniones comunitarias. En términos generales, la información procesal también fluyó de manera aceptable y solo se reportaron incidentes menores debido a la complejidad de los procesos, las distancias o el carácter colectivo del asesoramiento legal. Por ejemplo, en el caso Guapinol-San Pedro, hay ocho abogados que representan a los ocho acusados en la misma disputa legal.

Cabe mencionar también que la investigación afirmó que los integrantes de los colectivos ciudadanos en el centro de estos casos tenían un nivel de educación política más alto que la persona promedio en ambos países. Durante las entrevistas se reveló que, salvo en el caso Sepur Zarco⁷, la Iglesia Católica había jugado un papel importante en dicha educación política, mediante diferentes procesos de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento que se dieron mucho antes de que estallaran las disputas legales. En cuanto a los casos Chabelo y Guapinol-San Pedro, fue a través del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación-Servicio Jesuita (ERIC), Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y las parroquias de Tocoa y San Pablo.⁸ Para el caso Mam vs. Hidrosalá fue a través de la unidad para la Defensa de la Tierra de la Iglesia Católica en San Marcos y la de San Pablo para la comunidad Mam de la región.⁹

El empoderamiento y la participación de las mujeres

En el caso de Sepur Zarco, fueron conscientes de adoptar un enfoque de empoderamiento de la mujer desde el principio (como también se practicó en otros casos de justicia transicional en Guatemala, como los casos de genocidio Ixil), lo cual representa **una buena práctica**. Todo el caso fue diseñado para asegurar que las necesidades y prioridades de las mujeres indígenas sobrevivientes permanecieran en el centro del caso y que las mujeres recibieran un acompañamiento y una atención sensible al género y con pertenencia cultural, antes, durante y después del juicio. El acompañamiento incluyó asistencia legal centrada en los sobrevivientes, apoyo psicosocial con pertenencia cultural, espacios para el apoyo entre pares, asegurar la traducción e interpretación durante todo el proceso, así honrando su idioma materno Q'eqchi' y el fortalecimiento del sujeto político a

⁶ Entrevistas con A. Alvarenga, Y. González, J. Mejía, y miembros de la comunidad de Guapinol; F. Sánchez, San Pablo, y H. López de Paz, COPAE.

⁷ Recibieron formación en Derechos humanos de la Alianza para Romper el Silencio y la Impunidad (ARSI)

⁸ Entrevistas con J. Mejía y Y. González, ERIC; J. López, Parroquia Tocoa; F. Sánchez, San Pablo.

⁹ Grupo focal en San Pablo, Guatemala.

través de capacitación en derechos humanos y otras medidas de desarrollo de capacidades. Las 15 mujeres Q'eqchi' que habían sobrevivido a la violencia y la esclavitud sexuales decidieron buscar justicia en el 2010 y se unieron a **tres organizaciones de la sociedad civil y feministas aliadas**: el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP, Mujeres Transformando el Mundo -MTM, y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas -UNAMG. En conjunto, se las conoció como la Alianza para Romper el Silencio y la Impunidad (ARSI), mientras que las 15 mujeres Q'eqchi' sobrevivientes formaron el Colectivo Jalok U. Durante los seis años que tomó construir, litigar y ganar el caso, la Alianza ayudó a las mujeres de Sepur Zarco a superar el miedo, organizarse y diseñar su estrategia de litigio estratégico. Durante las diferentes etapas del proceso, la Alianza mantuvo un diálogo constante con las mujeres y brindó un apoyo integral, considerando que la mayoría de las mujeres tienen más de 60 años, son analfabetas y no hablan español. Los esfuerzos de la Alianza se enfocaron principalmente en empoderar a las mujeres para que fueran protagonistas de su propia lucha y lograran justicia, reparación y reconocimiento de sus derechos. Las mujeres sobrevivientes también recibieron el respaldo de otras organizaciones de mujeres y grupos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Las mujeres sobrevivientes también fueron consultadas en todas las decisiones importantes relacionadas con el caso. Las abogadas del caso y el personal de apoyo tuvieron el respeto y la sensibilidad de informar a las mujeres sobre los incidentes procesales a través de intérpretes y las mujeres consultaron su fuego sagrado en las ceremonias mayas antes de dar su opinión sobre qué decisión tomar, cómo y cuándo debía ser tomada. Por ejemplo, este ritual fue decisivo para definir cuándo y cómo se capturaría a los agresores, ya que sus familiares viven en la misma comunidad que las sobrevivientes.

“Todo lo que hicimos fue consultado a nosotras por ellas, lo que queríamos hacer y lo que no queríamos hacer. Nada hicimos nosotras solas, ni ellas solas, todo fue en consenso y en conjunto, que, si decimos sí, pues entonces sí, sino pues no”

Querellante del caso Sepur Zarco¹⁰



Las abuelas de Sepur Zarco en el juicio para condenar a sus agresores por esclavitud sexual. Crédito: Mujeres Transformando el Mundo

Por otro lado, no se aplicó un enfoque de empoderamiento de la mujer a los otros tres casos, que trataban de personas defensoras de derechos humanos criminalizadas. Los acusados de estos casos eran/son en su mayoría hombres, aunque en el caso Mam vs. Hidrosalá, dos mujeres defensoras también fueron detenidas y procesadas. Varias mujeres defensoras involucradas en el campamento pacífico que defendía los ríos Guapinol y San Pedro también fueron criminalizadas y recibieron órdenes de captura. A principios de 2019 fueron absueltas de los cargos en su contra. Más allá de los/las defensores/as de los derechos humanos criminalizados/as, las esposas, madres, hijas y compañeras y compañeros defensores de primera línea, tanto hombres como mujeres, se han visto involucrados e impactados por la lucha por los derechos humanos y requerirían un apoyo específico y diferenciado dirigido a su empoderamiento político y su estabilidad e integridad emocional (ver la siguiente sección). **Tampoco se aplicó un enfoque sensible al género de forma consciente**, lo cual significa un vacío, sobre todo cuando se toma en cuenta cómo las mujeres y los hombres han jugado un rol central en la lucha por los derechos sobre los recursos. La investigación encontró que la contribución de las mujeres a cada proceso de litigio estratégico ha sido muy fuerte, aunque no siempre toman un papel de liderazgo reconocido o de primera línea, y estas contribuciones no se hicieron visibles ni fueron valoradas desde el principio. En la práctica, sin embargo, las mujeres han reemplazado a los líderes masculinos cuando ellos fueron detenidos, han tomado decisiones políticas importantes, han resistido a las fuerzas de seguridad (en el campamento de protesta de Guapinol) y, con el transcurso de tiempo, han aumentado su presencia en eventos públicos como reuniones de las municipalidades, audiencias legales, mítines, marchas, etc. También cabe señalar que una de las abogadas de Chabelo

¹⁰. Entrevista de profundidad. El Estor, Izabal, Guatemala. Diciembre 2019.

era una mujer (Sara Aguilar) y mujeres líderes de las ONGs han acompañado las luchas de las comunidades (por ejemplo, Dunia Pérez de ERIC, Juana Esquivel de FSAR). Ver anexo sobre la participación de la mujer en los casos para más información.

Acompañamiento psicosocial

Una de las preguntas de la investigación fue sobre qué nivel de acompañamiento psicosocial recibieron las mujeres y los hombres que jugaron un rol central en los casos, entendido en el contexto de la investigación como un “proceso estratégico de apoyo a la estabilidad e integridad emocional individual, familiar y colectiva, donde se generan espacios de expresión y reconocimiento del impacto emocional que generan las violaciones a sus derechos humanos.” Según la organización contraparte guatemalteca ECAP, quien acompañó a las mujeres Q’eqchi’ sobrevivientes de esclavitud sexual en Sepur Zarco, antes, durante y después del juicio, el acompañamiento psicosocial “incluye asistencia y acompañamiento personal, familiar y comunitario para enfrentar el sufrimiento, reconstruir los lazos sociales para el tejido social, promover las capacidades locales y los proyectos de vida sostenibles como parte del reconocimiento de la autonomía inherente en todos y cada uno de los seres humanos”.

Si bien se halló que las mujeres de Sepur Zarco habían recibido un apoyo psicosocial integral y profesional como parte del enfoque de litigio estratégico, las y los sujetos de derechos involucrados en los otros tres casos solo recibieron un apoyo psicosocial mínimo y ad-hoc, o no recibieron ninguno. Sin embargo, aunque no se brindó ayuda psicológica profesional, las y los sujetos de derechos involucrados informaron que habían sentido el apoyo moral y emocional a través de las acciones prácticas de solidaridad en el terreno. Por el contrario, cabe destacar que los familiares más cercanos a los/as defensores/as de derechos humanos criminalizados/as al centro de los otros tres casos - como las esposas, las parejas y las madres - no recibieron ningún apoyo en específico. El equipo de investigación levantó una preocupación por ese tema, ya que fue evidente a partir de las entrevistas que estas mujeres han estado brindando un gran apoyo emocional, moral y práctico a sus esposos, parejas, hermanos, hermanas, hijos e hijas que fueron criminalizados y se han visto emocionalmente muy impactadas por las luchas por los derechos de los recursos naturales y las disputas legales asociadas.



Dos hijas de los defensores de Guapinol encarcelados, Liss Jireth Cedillo Zúniga (7) y su amiga Cristhel Alejandra Romero Portillo, sosteniendo sus dibujos frente al Ministerio Público en Tegucigalpa, Honduras. El cartel del fondo dice “Guapinol resiste”. Crédito: Giulia Vuillermoz

I CONCLUSIONES

1. En Honduras, como en Guatemala, los sujetos políticos que mediante litigios estratégicos defienden la tierra, el territorio, los recursos naturales y los Derechos humanos, lo hacen en condiciones de alto riesgo, “[...] en un espacio cívico bajo ataque, en un contexto de serias violaciones y restricciones de los derechos civiles y políticos. [...] Las personas defensoras son atacadas en total impunidad, y criminalizadas, deslegitimadas y desprestigiadas debido a su labor de promoción y defensa de los derechos humanos”.¹¹
2. A pesar de las agresiones sufridas, que incluyen golpizas, agresiones con gas lacrimógeno, torturas, violaciones, desapariciones y muertes, ninguno de los sujetos políticos estudiados está implementando políticas, planes, medidas de seguridad y acompañamiento psicosocial proporcionales al alto riesgo que corren, aunque hay esfuerzos incipientes sobre el tema.
3. Particular importancia tiene la ausencia de atención sostenida a los/las familiares de las víctimas, muertos, desaparecidos, detenidos, criminalizados, dirigentes amenazados/as, abogados/as y acompañantes. En este viacrucis, las mujeres, madres, esposas e hijas son las más afectadas. Además del acompañamiento psicosocial y la asistencia material de emergencia, se requiere impulsar políticas de formación e involucramiento para empoderar a las mujeres, en la familia y en la comunidad. La mayoría de las víctimas masculinas entrevistadas, adujeron que la familia fue su fortaleza, su sostén, pero a ese sostén hay que darle apalancamiento de todo tipo, mediante políticas institucionales.
4. Salvo Sepur Zarco, tres de los Litigios Estratégicos investigados se inician enfrentando acciones represivas del Estado o de particulares, con dirigentes/as detenidos y/o criminalizados, sin poder efectuar de antemano un diseño sistémico e integral de la estrategia general de la Litis, con una argumentación jurídica holística, y con elementos probatorios articulados, y sin contar con recursos humanos y materiales suficientes. Es usual que el componente penal, para preservar o liberar a los/las dirigentes, subsuma los reclamos originales y modulares del Litigio Estratégico, como en el caso Guapinol-Sector San Pedro, en el que el inicial reclamo del Derechos humanos al agua y al saneamiento ha sido opacado por el esfuerzo para liberar y acompañar a los detenidos.
5. Las estrategias jurídicas, políticas, sociales, comunicacionales y financieras se articulan sobre la marcha, en condiciones difíciles, quedando relegados a segundo plano los aspectos de fortalecimiento del sujeto político, formación sociopolítica y acompañamiento psicosocial, salvo en el caso de Sepur Zarco. Es en esa marcha a contracorriente que se formulan y persiguen los aspectos estratégicos de la Litis, al tener que enfrentar falencias institucionales, aberrantes interpretaciones normativas, o conductas jurídico-políticas inaceptables, de acuerdo con los estándares internacionales. De gran significación fue la formulación, sobre la marcha, de un **plan de incidencia nacional** en el caso Guapinol-Sector San Pedro, que fue acuerpado por todas las partes y OSC participantes, logrando legitimar el Litigio Estratégico y posicionándolo en la agenda político-social hondureña. En el sistema penitenciario y en la prensa, se reconoce al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, a los detenidos y a sus abogados, como “los ambientalistas”, aunque muchos estén sindicados de delitos de alto impacto.
6. Los litigios estratégicos se libran ante aparatos de justicia que acusan rasgos de corrupción, ineficiencia, parcialidad, racismo, machismo, sexismo, conservadurismo, etc. Por lo tanto, el sujeto político debe ser fortalecido en la misma dimensión que los obstáculos institucionales y procesales que va a enfrentar.
7. Al revisar las políticas estatales de criminalización de defensores/as de derechos humanos que se impulsan en Honduras y Guatemala, es evidente que van dirigidas a desgastar al sujeto político, en los ámbitos jurídico, económico, político, social y familiar (desprestigio), con el fin de desmovilizarlo. Por todo ello, su fortalecimiento participativo es fundamental. A lo largo de casi todas las entrevistas con víctimas o familiares, fue evidente que las calumnias afectaron seriamente el ánimo de estos sujetos de derecho, que reiteradamente demandan que “se limpie nuestro nombre y se conozca nuestra verdad”¹².
8. Rara vez el fortalecimiento del sujeto político es asumido como una política permanente, transversal

¹¹. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras. ONU. 2019.

¹². Entrevista a Abuelas de Sepur Zarco. Guatemala.

e integral. Cuando se logra el fortalecimiento, se da como efecto del conjunto de la lucha, más que como resultado de una planificación y una política institucional.

9. Concibiendo al sujeto político como un espacio de convergencia, que crece y se consolida de manera progresiva y temporal, la clave de su consolidación es **la participación ciudadana**, sea esta comunitaria, regional o nacional. Es por ello que la fortaleza del sujeto político es variable, en dependencia del incidente procesal que se esté ventilando, y a la coyuntura político-social que se esté viviendo. Por participación ciudadana entendemos el involucramiento de ciudadanos/as organizados/as que conocen sus derechos humanos y los ejercen conscientemente, en pos del bien común. Sin participación ciudadana, nunca se fortalecerá al sujeto político; es en la arena cívico-política que se fragua el sujeto de cambio.
10. En principio, toda estrategia de reclamo de derechos colectivos tiene un claro sentido político, en especial cuando se trata del ejercicio de los derechos de los Pueblos indígenas que, usualmente, sufren discriminación y marginación. Un elemento central para obtener un resultado positivo en los planteos judiciales es la posibilidad de articular lo político junto a lo jurídico, sobre todo cuando un Estado se rige bajo un sistema jurídico monista, de modo que la solución del caso legal contribuya a transformar las deficiencias institucionales, las políticas de Estado o los problemas sociales que han originado el reclamo. Así pues, para incidir en el contexto nacional, hay que analizar la coyuntura, efectuar un balance de fuerzas e impulsar un plan de lucha con objetivos precisos.¹³
11. En todos los casos estudiados, los adversarios de los Litigio Estratégico librados buscan desprestigiar, criminalizar y deslegitimar la lucha y el reclamo del sujeto político, apoyándose en las empresas mediáticas. En esta batalla por ganar la aceptación y la solidaridad social, es de vital importancia la alianza con redes sociales y medios de comunicación alternativos. El ERIC, en el Aguán, y la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad en el caso Sepur Zarco, desarrollaron una acción comunicacional muy valiosa para los Litigio Estratégico. También COPAE lo ha hecho, produciendo videos en los que las víctimas cuentan su verdad.
12. Salvo en el caso de Sepur Zarco, en los restantes Litigio Estratégico aún no se alcanza un enfoque de género en la lucha, concebido con el fin de visibilizar la realidad familiar, comunal y laboral que viven las mujeres, evidenciando los procesos culturales y los códigos sociales que internalizan y refuerzan los mecanismos de subordinación de las mujeres respecto a los hombres. La perspectiva de género no sólo analiza y busca cambiar la relación de subordinación de las mujeres respecto a los hombres, sino también las relaciones entre mujeres, evidenciando cuán funcionales son de sus prácticas con el sistema. Este tema aún no ha sido posicionado en forma prioritaria desde el inicio de los Litigio Estratégico, pero la necesidad de impulsarlo se ha ido haciendo evidente de manera progresiva por el aporte, empoderamiento y activa participación de las mujeres en el transcurso de los procesos.
13. Al identificar este vacío, la conclusión es que se requiere un trabajo sistemático de formación y concientización sobre enfoque de género equitativo, en los roles o papeles de hombres y mujeres, en las familias y la comunidad, para propiciar relaciones armoniosas, de respeto y valoración, que favorezcan una vida ciudadana con igualdad y equidad de oportunidades para todas/os. Hay que partir de la condición histórica de subordinación de las mujeres en la sociedad patriarcal, por lo que hay que promover, de manera permanente, **su empoderamiento** para avanzar hacia la equidad.
14. Encontramos en el transcurso de la investigación que no hay una definición de acompañamiento psicosocial en los programas país de Guatemala y Honduras; de igual forma, durante las consultas con los Grupos Focales y entrevistas realizadas en la investigación, encontramos que no hay conocimiento sobre el tema y que, exceptuando el caso de las Abuelas de Sepur Zarco, el acompañamiento psicosocial no se ha implementado.
15. A pesar de esfuerzos iniciales identificados, aún no se alcanza un nivel satisfactorio de acompañamiento y trabajo psicosocial, con el propósito de que se tomen medidas para reforzar la estabilidad e integridad emocional individual, familiar y colectiva, tanto para las víctimas, como para sus familias y la comunidad involucrada, en donde se propicien espacios de expresión y reconocimiento sobre el impacto emocional causado por las violaciones a sus derechos humanos. Esto, procurando que tomen conciencia de su derecho a que se les haga justicia, se reconozca su verdad y se limpie su nombre.

¹³. Ferrigno F., Víctor. Estrategia General para los Litigios de Alto Impacto. Guatemala, 2011.

I RECOMENDACIONES

1. En materia de criminalización del sujeto político
2. En materia de capacitación en Litigio Estratégico del sujeto político, promotores/as jurídicos/as y abogadas/os
3. En materia de comunicación
4. En materia de fortalecimiento del sujeto político
5. En materia de enfoque de género
6. En materia de acompañamiento psicosocial

De carácter general

En materia de criminalización del sujeto político



1. Es inadmisibles que los movimientos ciudadanos y los sujetos políticos que promueven Litigio Estratégico lo sigan haciendo a un costo tan alto de su integridad personal y de sus vidas. Por ello, Trócaire debería promover que las OSC, con las que trabaja en ambos países, formulen e impulsen una política y un plan de defensa frente a la represión y criminalización, a partir de las recomendaciones sobre la materia emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala, y las contenidas en el *Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras*.
2. Los sujetos políticos deberían impulsar políticas, planes, medidas de seguridad y acompañamiento psicosocial proporcionales al riesgo que corren, antes durante y posteriormente al Litigio Estratégico.
3. Además del acompañamiento psicosocial y la asistencia material de emergencia, se requiere impulsar políticas de formación e involucramiento de los/las familiares de las víctimas, desaparecidos, detenidos, criminalizados, dirigentes amenazados/

as, abogados/as y acompañantes. Las mujeres, madres, esposas e hijas son las más afectadas, por lo que dichas políticas deberán tener pertinencia de género y cultural, particularmente cuando se trabaja con mujeres indígenas. Uno de los objetivos prioritarios a alcanzar en esta materia, es **el empoderamiento político-social de las mujeres**.

En materia de capacitación en Litigio Estratégico del sujeto político, promotores/as jurídicos/as y abogadas/os



4. La participación ciudadana es vital para la constitución y fortalecimiento de sujetos políticos que promuevan litigios estratégicos en las Cortes para reclamar judicialmente las violaciones a sus derechos humanos, en general, y los derechos relativos a la tierra, el territorio y los recursos naturales en particular. Para tal efecto, es necesario contar con dirigentes sociales, promotores/as jurídicos/as y abogados/as capacitados en materia de Litigio Estratégico. Esta materia aún no se enseña en las facultades de Derecho ni en las escuelas judiciales, mucho menos en la capacitación popular. Aunque tiene componentes multidisciplinarios, el Litigio Estratégico es un recurso jurídico, que requiere de conocimientos legales especializados, en materia de doctrina, teoría y de naturaleza procesal.

5. Es justo reconocer los esfuerzos realizados en ambos países al impulsar cursos de capacitación en Litigio Estratégico, pero se requiere un esfuerzo sistémico de más largo alcance. Por todo ello, es necesarios generar, en cada país, programas permanentes de capacitación en Litigio Estratégico, en la modalidad de diplomados, avalados por universidades o Institutos Superiores, para que los/ las alumnas se motiven a asistir.
6. En Guatemala, Trócaire podría reactivar el Programa de Capacitación en Litigio Estratégico con las Universidades de San Carlos, Landívar y Mariano Gálvez, que el Programa Maya-OACNUDH impulsó, con mucho éxito. Los módulos ya están diseñados –habría que adicionar uno en materia psico-jurídica– y el personal docente ya está identificado, y el costo se reduce al usar las instalaciones universitarias. Al haberse diseñado como un diplomado, las/ los comunitarios/as pueden asistir y reciben acreditación tri-institucional.
7. En Honduras, el ERIC y la FSAR tienen décadas de experiencia en capacitación popular, y podrían impulsar un diplomado similar.
8. En Guatemala, durante el conflicto armado interno, la mayoría de las/los abogados/as agraristas y laboralistas fueron exiliados, desaparecidos o asesinados, dejando al movimiento social legalmente desprotegidos. Esta situación fue resuelta, parcialmente, con la formación de promotores/as jurídicos/as, salidos de las propias filas obreras y campesinas. De esa manera, un/a abogado/a podía dirigir a seis u ocho promotores jurídicos, multiplicándose su capacidad de asesoría. Esta experiencia exitosa puede revivirse, incluyéndolo a dichos/as promotores/as en los diplomados, y resolver muchas falencias.

En materia de comunicación



9. Formular una Estrategia de Comunicación del Litigio Estratégico, a partir de los elementos que se listan a continuación, estableciendo los mensajes a comunicar de lo concreto a lo general, es decir, de los litigantes a la comunidad, luego a la región, al país y, finalmente, a los aliados e instituciones en el ámbito internacional.
 - Análisis de coyuntura
 - Autoevaluación (FODA - fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
 - Antecedentes del Litigio Estratégico por comunicar¹⁴

¹⁴. Fundamentación de la legitimidad y legalidad del derecho reclamado, actores que lo conculcan, consecuencias para la comunidad o para la sociedad por la violación del derecho, etc.

- Marco de referencia del tema a comunicar¹⁵
- Análisis Comunicacional¹⁶

El impulso de tal estrategia busca obtener como resultados Comunidad y/o sectores sociales (Grupos Meta) concienciados y movilizados en apoyo a las demandas contenidas en el litigio estratégico, las cuales se han legitimado ante la opinión pública.

De carácter específico

En materia de fortalecimiento del sujeto político



10. Debe diseñarse una estrategia general para el fortalecimiento del sujeto político, como un componente transversal de todas las estrategias específicas, estableciendo metas concretas y medibles, sin olvidar que el objetivo central es **su empoderamiento**, o sea, aumentar su capacidad para ejercer una dosis mayor del poder soberano. Además, dicho fortalecimiento debe planificarse y realizarse con un enfoque en derechos humanos, particularmente con un enfoque de género y con pertinencia cultural y etaria.
11. La estrategia de fortalecimiento deberá impulsarse entendiendo el sujeto político como un espacio de convergencia, que crece y se consolida de manera progresiva y temporal, la clave de su consolidación es **la participación ciudadana**, sea esta comunitaria, regional o nacional. Es por ello que la fortaleza del sujeto político es variable, en dependencia del incidente procesal que se esté ventilando, y a la coyuntura que se esté viviendo. Por participación ciudadana entendemos el involucramiento de ciudadanos/as organizados/as que conocen sus derechos humanos y los ejercen conscientemente, en pos del bien común.
12. El fortalecimiento del sujeto político pasa por **el empoderamiento político-social de las mujeres**. Este proceso no es fácil ni rápido. Además de la represión y del machismo, identificamos que el papel de las iglesias neo-pentecostales, y sus pastores, que condenan la participación ciudadana, son un obstáculo difícil de superar, como lo atestiguaron las Defensoras del Agua, del caso Guapinol-Sector San Pedro. En consecuencia, hay que diseñar programas formativos diferenciados, con hombres y con

¹⁵. Consiste en todos los elementos que conforman el Plan General del Litigio Estratégico y los objetivos de este.

¹⁶. Son todas las instancias que inciden en el desarrollo comunicacional de un Litigio Estratégico.

mujeres, y después mixtos. Es importante que estos programas formativos busquen legitimar el papel de las mujeres como defensoras de los Derechos humanos, el territorio y los recursos naturales, de manera que se amplíen los imaginarios colectivos, y que las comunidades acepten que las mujeres se separen del fogón, y actúen como agentes de cambio.

En materia de enfoque de género

13. Con el propósito de promover que las organizaciones socias de Trócaire incluyan un enfoque de género en los casos de Litigio Estratégico, recomendamos que implemente un área que atienda de forma específica y prioritaria este tema, en los equipos que se ocupan de apoyar y acompañar los casos de Litigio Estratégico y las luchas de los/as defensores/as de derechos humanos, así como de las comunidades en las que se desenvuelven. Esto con la finalidad de atender este vacío identificado en las entrevistas realizadas durante la investigación, y responder a las expectativas expresadas por los/as entrevistados/as.
14. El trabajo que se realice deberá ser enriquecido con el empoderamiento consciente y equitativo de las/os integrantes y dirigentes/as de las organizaciones, y de las comunidades involucradas, para fortalecer las luchas y liderazgos, comenzando con medidas afirmativas para compensar la subordinación histórica de las mujeres.



En materia de acompañamiento psicosocial

15. El acompañamiento psicosocial incluye asistencia y apoyo personal, familiar y comunitario para afrontar el estrés, trauma, confusión y sufrimiento emocional, pero también se propone contribuir a la reconstrucción del tejido social que ha sido afectado, e incidir para potenciar las capacidades individuales y colectivas, que refuercen proyectos de vida sostenible, que forma parte del derecho y reconocimiento de autonomía, que todos/as y cada uno/a de los seres humanos tenemos para una vida digna.
16. Promover una política institucional, en cada organización socia, para el acompañamiento y trabajo psicosocial. También recomendamos que haya una definición operacional sobre psicología social y violencia política, para ubicar el aporte de



acompañamiento psicosocial, que sea compartida e incorporada en el trabajo y proyectos que emprendan las organizaciones socias de Trócaire, en su participación y apoyo a procesos de Litigio Estratégico.

17. Recomendamos que se incorpore un área específica en las organizaciones socias, para que se atienda esta expectativa, ubicada como una necesidad al afrontar los procesos de Litigio Estratégico y las luchas que acompañan. Esto, con el propósito de potenciar, fortalecer y empoderar a las víctimas, querellantes, familiares, profesionales que participan y afrontan el proceso, así como a las comunidades afectadas.
18. Hay que procurar disponer de personal especializado, para dar un servicio de acompañamiento psicosocial durante y después del Litigio Estratégico para víctimas, y la asistencia requerida por los/as defensores/as de derechos humanos, sus familias y comunidad involucrada. Así como a las personas, personal y profesionales que acompañan los procesos y las luchas, porque durante las consultas efectuadas ellos/as han reconocido que también han sido afectados/as por estrés, amenazas, ataques, desprestigio y criminalización.
19. Para este propósito, también se recomienda contar con la colaboración de organizaciones especializadas que brindan servicio psicosocial, y que se ocupan de la investigación y análisis en esta materia, cuyo trabajo se especializa en el campo de la psicología social y violencia política. Asimismo, buscar el aporte de centros de estudio, que tienen contemplada la formación de profesionales especializados en la materia.

LIBERTAD PARA GUAPINOL

Presos políticos por defender los ríos en Honduras

[Inicio](#) [Cartas para Guapinol](#) [Blog](#) [English](#) [!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\)](#) [!\[\]\(90a2fb2f2c617b26262139ae4159c0a0_img.jpg\)](#)



CARTAS PARA GUAPINOL | LETTERS FOR GUAPINOL

En Honduras, 8 defensores del agua han pasado más de 15 meses encarcelados injustamente.

Envíales a ellos y a sus familias un mensaje de solidaridad.

In Honduras, 8 water defenders have spent more than 15 months unjustly jailed.

Send them & their families a solidarity message.

#LibertadParaGuapinol #FreedomForGuapinol

Trócaire, Maynooth,
Co. Kildare, Ireland
T: +353 (0)1 629 3333
F: +353 (0)1 629 0661
E: info@trocaire.org
www.trocaire.org

Trócaire, 50 King Street, Belfast,
BT1 6AD, Northern Ireland
T: +44 (0) 2890 808030
F: +44 (0) 2890 808031
E: infoni@trocaire.org
www.trocaire.org

ROI Revenue Number: CHY 5883
NI Revenue Number: XR10431

Trócaire